

Las lógicas ocultas de los nuevos conflictos sociales



Nuevos conflictos, viejas causas

● El reiterado discurso del gobierno acerca de su preferencia por los pobres y la solidaridad al parecer no incluye la posibilidad de los conflictos sociales. Desde la primera administración Ortega, se ha difundido la idea que el gobierno tiene preferencia por las clases desposeídas del país y que su gestión está enfocada en mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, durante los últimos dos años han comenzado a emerger en el país una serie de conflictos que tienen una naturaleza social más que política y cuestionan abiertamente este discurso.

Algunos de estos conflictos tienen su origen en demandas históricas a las cuales nunca se les ha dado solución más por falta de voluntad política que otra cosa, tal es el caso de los conflictos por la propiedad que ya llevan más de dos décadas pendientes. Otros conflictos tienen su causa en las frustradas expectativas que diversos sectores de población pusieron en la gestión del gobierno Orte-



ga para mejorar sus condiciones de vida, como es el caso de los ancianos jubilados que reclaman la entrega de una pensión reducida. A todos ellos el gobierno hasta ahora ha respondido con el silencio, aun cuando son la expresión concreta de las inequidades, la pobreza y la marginalidad existentes en el país.

Muchos de estos conflictos no son nuevos, ya se habían presentado durante los gobiernos pasados y si bien, se relaciona con viejos problemas estructurales de la sociedad nicaragüense que nunca fueron resueltos, lo cierto es que en épocas pasadas su no resolución se atribuía al carácter neoliberal de los gobiernos, pero ahora, con dos administraciones seguidas de un gobierno cristiano, socialista y solidario, no hay visos de solución en las políticas públicas. Por el contrario, un análisis de largo plazo sobre los conflictos permite identificar las lógicas ocultas que los dinamizan.

Tierra, frontera agrícola y comunidades indígenas

Los conflictos por la propiedad y la tierra no son nuevos en Nicaragua. Su historia se remonta muy a inicios de los 90, recién iniciada la transición. En esa época se enfocaron en dos tipos de problemáticas: la reversión de la reforma agraria sandinista y los conflictos por las tierras entregadas como indemnización a los excombatientes del conflicto armado de los 80. Los actores involucrados en ese entonces eran los pequeños campesinos beneficiados por la reforma agraria, excombatientes y campesinos pobres demandantes históricos. Detrás de ellos se escondía una lógica de restructuración acelerada en la tenencia de la tierra y el inicio de la reconstitución de los latifundios. Este primer período se extendió durante toda la década de los 90.

Durante la década del 2000 hasta la fecha, los conflictos por la propiedad de la tierra han cambiado de

forma aunque sus motivaciones son similares al período anterior. Es decir que su propósito es fortalecer la estructura latifundista en la propiedad de la tierra y la expansión de la frontera agrícola. Para eso se promueve la invasión de áreas protegidas y las propiedades de comunidades indígenas. Los actores de estos conflictos son campesinos desposeídos que avanzan extendiendo la frontera agrícola, pero estos son ocupantes temporales de las tierras y detrás de ellos se encuentran grupos mafiosos que trafican con la madera y/o luego se apropiaron de las tierras para cultivos o ganadería. Los principales afectados son las comunidades indígenas que son despojados y expulsados de sus tierras.

Los conflictos de propiedad, especialmente en el sector rural, han tenido varios momentos desde 1990 hasta la fecha y al examinarlos a fondo se revela una lógica de acumulación económica en marcha desde hace tiempo

donde participan varios grupos de poder económico en el país.

Asentamientos precarios

La otra cara de los conflictos de propiedad tiene carácter más urbano y se relaciona con la presión de miles de personas empobrecidas que emigran del campo hacia la ciudad y aquellos asentados en urbanizaciones precarias sin acceso a vivienda y servicios básicos. Este tipo de asentamientos ha creado verdaderos bolsones de miseria en las periferias de las principales ciudades del país.

La falta de una política de vivienda verdaderamente social, así como la falta de respuesta del gobierno central y los gobiernos locales al continuo proceso de migración del campo a la ciudad ha agudizado la presión. Pero además, esto se ha combinado con las expectativas generadas en grandes grupos de población a causa de las promesas gubernamentales y las políticas clientelistas en curso. Pero además, la práctica de irrespeto a la ley de parte del gobierno les ha abierto una puerta para las invasiones y ocupaciones ilegales de terrenos con la esperanza de que el gobierno ceda entregándoles lotes. De tal manera que durante los últimos meses se han incrementado los casos de invasiones de terrenos urbanos o cercanos a las ciudades para la instalación de estos asentamientos espontáneos.

La mayoría de los precaristas son personas realmente necesitadas de vivienda y de servicios básicos, pero algunos de ellos han hecho de esto un negocio lucrativo detrás del cual hay grupos con recursos económicos y con intereses de apropiación de terrenos valiosos, que los instrumentalizan. En algunos casos, el mismo gobierno ha participado en las invasiones y despojos de este tipo de terrenos como en el caso reciente de Punta Teonoste.

Nuevos conflictos en el panorama

Pero los conflictos de la propiedad no son los únicos en el panorama del país. Hay nuevos conflictos relacionados con problemas que antes no

se habían presentado. Algunos de los conflictos recientes se relacionan con la explotación minera realizada por empresas transnacionales como en el caso de Santa Pancha y Santo Domingo, y revelan que se está produciendo un cambio en el campo de la economía del país, dando paso al establecimiento de un modelo extractivista y depredador del medioambiente. Evidentemente, detrás hay un grupo económico de nacionales y capital trasnacional. El modelo es el mismo que se está implementando en toda América Latina desde hace más de una década y genera grandes conflictos sociales que han terminado afectando a las poblaciones más empobrecidas de los países y a los grupos indígenas. Los efectos más brutales han sido: desalojo y despojo de tierras, destrucción del medio ambiente, migración y violencia.

Otros conflictos sociales del contexto, aunque no son muchos, revelan la lógica neoliberal y descarnada de las políticas y el modelo económico del país. Tal vez el caso más revelador entre todos es la protesta activa de los ancianos demandando al gobierno la entrega de una pensión reducida de retiro. Evidentemente, la actitud sorda, muda y ciega del gobierno frente a las sistemáticas protestas realizadas por grupos numerosos de ancianos, muchas veces con hambre, bajo el sol y recorriendo largas distancias, muestra que en realidad no hay tal preferencia por los pobres, pero si po-

líticas públicas que refuerzan el modelo neoliberal y protegen a grandes grupos de poder económico.

La respuesta gubernamental al conflicto

Hasta el momento, el gobierno ha guardado silencio respecto a estos conflictos sociales, lo que no quiere decir que se ha cruzado de brazos o es indiferente a ellos. Por el contrario, en su silencio es claro que existe una política gubernamental que en principio, se rehúsa a reconocerlos, y cuando sube el tono de la demanda, utiliza a la policía como instrumento represivo para contenerlos y “disuadir” a otros actores sociales de no utilizar el mismo recurso para sus demandas. Vale la pena decir que el uso de la represión abierta es selectivo y se aplica solamente en aquellos casos en los cuales los actores sociales afectan a grupos de poder económico vinculados con el gobierno o con su conglomerado de empresas Albanisa.

Más recientemente, la legalización de los CPC, ahora gabinetes de la familia, se convierte en un instrumento de control y vigilancia social que funcionará como mecanismo intermedio entre el silencio oficial y la represión policial.

La estrategia gubernamental utilizada hasta ahora de hacerse sordo, ciego y mudo la va mantener tanto como pueda, pues en el país de la armonía y el gobierno del buen vivir la existencia de conflictos sociales es



impensable. Pero como el sistema político y la institucionalidad gubernamental del país no están diseñados ni preparados para canalizar los conflictos sociales, es muy probable que la escala del conflicto se incremente en la medida en que crezcan las expectativas clientelistas que promueve el gobierno dentro de la población y se acumule el descontento cuando no se produzcan soluciones o respuestas más o menos efectivas.

Un hilo grueso que une lógicas perversas

Ahora bien, un análisis más a fondo de los diferentes nichos de conflictividad social existentes en el país permite identificar un conjunto de lógicas ocultas, que aparentemente están separadas entre sí cuando en realidad están unidas por un hilo grueso de naturaleza económica. Este es la lógica de la acumulación que diferentes grupos de poder económico desarrollan sobre las espaldas de los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad nicaragüense. Y eso incluye al recién constituido grupo económico que rodea a la familia presidencial y al gran capital privado nacional e internacional con presencia en el país.

Para ellos, mientras el gobierno mantenga las bases del modelo económico neoliberal y les asegure la “libre competencia” en su propio nicho económico, las condiciones de los grupos empobrecidos y marginalizados de la población no son importantes. Al final, es probable que algunos de ellos también se beneficien temporalmente del conflicto social en tanto ciertas acciones de presión y movilización de los actores les permiten resolver su propia competencia con otros grupos por alcanzar el liderazgo de un determinado sector económico. El grupo económico familiar Ortega-Murillo es uno más en la competencia y eso explica las políticas gubernamentales de tratamiento de los conflictos sociales.

Los actores sociales y su lógica

Cuando las promesas no alimentan y el hambre aprieta, la cabeza no piensa. Al menos no como quisieran el gobierno y



los poderosos. Una política gubernamental clientelista y la nueva “responsabilidad social empresarial” no son suficientes para frenar las expectativas y demandas de los actores. Por el contrario, solamente contribuyen a incrementarlas, especialmente cuando se practican en un país de mayorías pobres y marginalizados.

► **Las expectativas y demandas de los actores sociales son reales, forman parte de la vida cotidiana de la gente, de manera que no hace falta que nadie los convenza con discursos para que se den cuenta que a pesar de las promesas, su situación no cambia. Mientras tanto, la historia enseña que los conflictos no son estallidos espontáneos que ocurren por casualidad un día cualquiera. Son procesos de acumulación de descontento que estallan cuando no encuentran salida.**

En Nicaragua, el proceso de acumulación de descontento social lleva al menos tres lustros, desde que se comenzó a expresar la insatisfacción ciudadana con el desempeño de la democracia. Durante los gobiernos precedentes, las demandas y expresiones

de conflicto social fueron de alguna manera desactivadas a través de los llamados mecanismos y espacios de participación ciudadana. Pero a la falta de respuestas reales y de fondo se agregan ahora el cierre total de las instituciones, el cierre de los espacios de participación ciudadana, la vigilancia y el control social del gobierno sobre los ciudadanos y la perversa lógica de acumulación económica que prevalece en el país.

La emergencia de los conflictos actuales entonces, no es casual ni se trata de hechos aislados. Son la expresión de ese lento proceso de acumulación del descontento y la constitución de nuevos actores sociales, que esta vez saldrán a la calle sin que el gobierno tenga la posibilidad de instrumentalizarlos o cooptarlos políticamente como antes hizo mientras fue oposición. Una vez que los actores tomen conciencia y se constituyan en tanto tales, las políticas de vigilancia y control no bastarán para prevenir y desactivar la protesta, mientras que la represión solamente conseguirá alimentarla.

La época de las revoluciones ya pasó, pero no la de los conflictos y la movilización social. Ese es un recurso permanente e histórico de los pobres y desposeídos para hacerle saber a los poderosos que ellos siguen allí.